



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: EJECUTIVO LABORAL ANEJO PROCESO ORDINARIO
Radicado: 05001-31-05-014-2022-00283-01 (E2-22-279)
Accionante: PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA
Accionada: AFP PORVENIR S.A.
Procedencia: JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: MANDAMIENTO DE PAGO

En Medellín, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL ANEJO AL PROCESO ORDINARIO conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-014-2022-00283-01 (E2-22-279), instaurado por PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA en contra de la AFP PORVENIR S.A., con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA, contra el auto mediante el cual libró orden de pago en contra de la AFP PORVENIR S.A., proferido el 1° de agosto de 2022 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

La señora PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ejecutiva en contra de la AFP PORVENIR S.A., en procura de obtener el pago del saldo insoluto por concepto de indexación del retroactivo pensional reconocido y que calculó en la suma de \$ 13.201.699, junto con las costas que se causen dentro de la actuación ejecutiva.

Como fundamento de sus pedimentos, indicó que el juzgador de primera instancia, accedió al reconocimiento de la pensión de invalidez, así también al pago del retroactivo pensional con ocasión a las mesadas insolutas, las cuales debían ser indexadas. Prosigue indicando que la AFP PORVENIR S.A., *liquidó deficitariamente la indexación, pues debió haber ascendido a la suma de \$15.905.618 y solo pagó la suma de \$2.703.919, adeudando la suma de \$13.201.699,*

agregando que *[p]or el presente cobro ejecutivo también se causan las costas y agencias en derecho correspondientes.*

1.1. Trámite de primera instancia

La solicitud de ejecución fue radicada en el despacho de primer grado el 29 de julio de 2022, a través del canal digital así dispuesto (docs.01 y 02, carp.01), peticionando, además, *se revise en su sistema si existe algún título por concepto de agencias en derecho consignado por el ejecutado, ya que de la información a la cual hemos podido acceder no ha sido posible obtener respuesta positiva al respecto.*

1.2. Decisión de Primera Instancia

El juzgador de instancia en auto del 1° de agosto de 2022 (doc.03, carp.01), resolvió librar orden de pago a favor de la impulsora señora PUALA ANDERA MÚNERA MEJÍA y en contra de la administradora del RAIS, limitando, no obstante, la obligación dineraria a la suma de \$966.461.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de relacionar las providencias judiciales que conforman el título ejecutivo traído en recaudo, expuso que, *se advierte en principio una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma determinada de dinero, siendo viable imponer la orden de apremio, pero no en la forma solicitada, toda vez que realizada las operaciones aritméticas respectivas, en los términos de la sentencia, por concepto de indexación arrojó un total de \$3.670.380, valor resultante del cálculo realizado por el Despacho, precisado que se partió de la fecha citada en la sentencia, es decir, del 01 de marzo de 2018, teniendo en cuenta una mesada inicial de \$781.242, a razón de 13 mesadas anuales y de incrementos legales anuales, hasta la fecha en que se pagó por Porvenir S.A. la sentencia el 14 de enero de 2022, por lo que, partiendo del valor cancelado por Porvenir S.A., a título de indexación (\$2.703.919), queda por tanto un saldo a deber de NOVECIENTS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$966.461), a título de indexación de las mesadas pensionales, monto por el cual ha de librarse mandamiento de pago,* incluyendo en la decisión revisada, la gráfica que ilustra los cálculos desarrollados.

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial de la señora PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA inconforme con la decisión, interpuso recurso apelación, en procura de que se modifique la decisión adoptada en

la primera instancia, para en su lugar, se disponga que el valor de la indexación pendiente de pago corresponde a la suma de \$13.201.699, requiriendo de esta Corporación, la reliquidación del crédito a fin de hallar el valor adeudado por la indexación (doc.04, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 08 de agosto de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 16 de agosto del mismo año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito que estimaren pertinentes; empero, la parte actora guardó silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si la orden de pago proferida en contra de la AFP PORVENIR S.A. y el ejercicio ponderativo vertido en la providencia impugnada, responden a la correcta indexación de las obligaciones dinerarias contenidas en las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por parte del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Primera de Decisión Laboral de esta Corporación, respectivamente, y, que dicho sea de paso, son báculo de la presente ejecución.

Para lo cual se deberá aplicar la fórmula matemática implementado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y su correcta utilización.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la decisión impugnada, en atención a que, conforme con las operaciones aritméticas desarrolladas en esta instancia, puntualmente en lo que a la indexación del capital adeudado respecta, el ejecutante interpreta de manera indebida la fórmula reservada para la actualización de las cuotas pensionales vencidas, pues de haberlo hecho en su correcta

dimensión, habría concluido, como con tino lo hizo el *a quo*, que la suma adeudada por este concepto no es otra distinta a \$966.461, mostrándose huérfana de soporte jurídico y aún fáctico la reclamación de la cifra de \$13.201.699.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 22 de junio de 2018, resolvió condenar a la AFP PORVENIR S.A., a reconocer y pagar a favor de la señora PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA, la pensión de invalidez a partir del 30 de agosto de 2013 y en cuantía igual a un SMMLV (págs.816 a 819, doc.02, subcarp.01, carp.01); que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, modificó la decisión proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín determinando que el derecho pensional se causó a partir del 1 de marzo de 2018 y no del 30 de agosto de 2013 (págs.829 a 831, doc.02, subcarp.01, carp.01); y que la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dispuso NO CASAR la decisión objeto del recurso extraordinario (págs.59 a 101, doc.03, subcarp.01, carp.01)

De igual forma, no se discutió que la AFP PORVENIR S.A., el 14 de enero de 2022 consignó a órdenes del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín y favor de la señora PAULA

ANDERA MÚNERA MEJÍA, las sumas de \$39.764.047 y \$2.703.919, por concepto de retroactivo pensional e indexación respectivamente (doc.12, subcarp.01, carp.01), sumas dinerarias cuya entrega se ordenó a favor de la impulsora de este trámite ejecutivo el pasado 28 de enero de 2022 (doc.08, subcarp.01, carp.01).

Siendo ello así, memora la Sala que el promotor de la Litis ubica como punto nodal del disenso, la limitación del saldo insoluto por indexación del retroactivo pensional, al guarismo de \$966.461, pretermitiendo a su criterio que el real valor adeudado corresponde a \$13.201.699, de acuerdo con la liquidación que enuncia, incorporó con la solicitud.

Puestas, así las cosas, lo primero que relieves la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso, es que, el objeto, o, si se quiere, el fin último, de los procesos ejecutivos no es otro que la completa satisfacción coactiva de las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, que consten *en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*¹; por lo que cristalino se muestra que las actuaciones judiciales de esta índole solo terminan por el cumplimiento o pago total de la obligación respectiva.

De suerte que, al momento en que el juzgador encuentre cumplidos los presupuestos arriba reseñados, libraré mandamiento de pago con la orden al ejecutado para que cumpla dentro del término legal o judicialmente establecido la obligación a su cargo que se reputa insoluto²; decisión que, conforme lo ha aquilatado la Corte Constitucional en sentencia SU-041 de 2018, *no solo tiene la característica de una providencia mediante la cual se admite la demanda porque reúne los requisitos para tal fin y da inicio al proceso respectivo, tal como ocurre en la mayoría de procedimientos y especialmente en el de naturaleza cognitiva o declarativa, sino que además, establece la competencia del juez que lo profiere para analizar los documentos que contienen la obligación cuya ejecución se pretende, pues debe encontrar acreditada la existencia de un título ejecutivo, porque satisfacen las condiciones formales y sustanciales establecidas en la ley y puede generar su cobro al ejecutado*. -Subrayado intencional de la Sala-

En línea con lo anterior, es el mandamiento de pago la decisión que cuantifica el monto de la obligación adeudada de forma inicial, o bien provisional³, en tanto en cuanto, lo allí dispensado

¹ Artículo 100 del CPTSS, y artículo 422 del CGP

² **Artículo 430 del CGP. Mandamiento ejecutivo.** Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez libraré mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

³ **Artículo 424 del CGP.** Ejecución por sumas de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe. **Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas.** Cuando se pidan intereses, y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar el porcentaje de la misma.

es susceptible de ser modificado bien por solicitud de la parte ejecutante⁴, bien por la prosperidad de uno cualquiera de los medios exceptivos que sean formulados por la convalidada a juicio⁵; señalando en este último caso el artículo 446 del CGP que, *[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado **cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo**, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.* -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En este contexto, si bien es la etapa de la liquidación del crédito, donde se concreta el valor realmente adeudado por la parte ejecutada⁶, no se pasa por alto que este ejercicio aritmético, en tratándose de ejecución por sumas de dinero⁷, debe someterse al marco de lo dispuesto en el mandamiento de pago; de ahí que, resulte tan trascendental como necesario, que las obligaciones allí consignadas, guarden consonancia por un lado con las aspiraciones del pretensor, y de otro, respondan al saldo efectivamente adeudado por la convocada; lo que finalmente acaece con la audiencia especial de resolución de excepciones de mérito y la posterior liquidación del crédito.

Lo anterior para significar que, sin perjuicio de los poderes oficiosos y de control de legalidad que tiene a su disposición el juez que surte la ejecución y que se consagran, entre otros, en los artículos 48 del CPTSS y 42 y 132 del CGP, los profesionales del derecho que apoderan a las partes integrantes de la litis, deben permanecer especialmente atentos para elevar de manera oportuna las solicitudes que estimen procedentes en orden a defender los intereses que le son confiados, puesto que éstos, como concedores de las lides y materias jurídicas, son los llamados a actuar con la oportunidad y conocimiento requeridos.

En el *sub estudium* las obligaciones reconocidas en sede judicial a favor de la señora PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA y a cargo de la AFP PORVENIR S.A., corresponden a: i. El

⁴ Artículos 93, 285, 286 y 287 del CGP. Corrección, aclaración y reforma a la demanda. Adición, corrección y aclaración de providencias. Artículo 28 del CPTSS. Reforma de la demanda. Artículo 65 del CPTSS. Procedencia del recurso de apelación.

⁵ Artículos 442 y 443 del CGP.

⁶ Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009. "Así pues, del estudio contextual de la disposición acusada es fácil concluir que para el momento en que debe presentarse la liquidación del crédito, (i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo transcurrido desde que la obligación se hizo exigible, cosa que viene señalada en la sentencia, y la tasa aplicable según los diferentes periodos, asunto que cada seis meses es determinado por la Superintendencia Financiera. De otro lado, es de suponer que tanto el deudor como el acreedor conocen la historia del crédito sobre el cual versa el proceso, es decir los pagos o abonos que se han hecho, y las modificaciones a las condiciones o términos del mismo que hayan podido producirse, y que en todo caso durante el transcurso del proceso han tenido la oportunidad de precisar esta información. Así las cosas, prima facie podría concluirse que las bases matemáticas y financieras, con base en las cuales se lleva a cabo la operación de liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo, se han precisado durante el trámite del proceso, de manera que para cuando se realiza dicha operación sólo hace falta calcular los intereses y la conversión a moneda nacional, si fuera el caso. De esta manera, aunque el cálculo de los intereses puede admitir diverso grado de complejidad según la fórmula acordada, en principio ni dicha operación de liquidación resultaría extremadamente compleja, ni menos aún la revisión de la misma, por lo cual los términos de diez y tres días fijados por el legislador para ello podrían ser juzgados como razonables, más si se tiene en cuenta que el principio de celeridad exige evitar dilaciones injustificadas en el progreso del trámite procesal.

⁷ Artículo 424 del CGP.

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a partir del 1° de marzo de 2018 y en cuantía inicial a un SLMMLV, y; **ii.** La indexación de las condenas impuestas; discutiendo la pretensora, concretamente el cumplimiento defectuoso de esta última obligación.

En razón a lo anterior, es menester en primer lugar determinar el valor del capital adeudado a la fecha del pago efectuado por la ejecutada, el 14 de enero de 2022 (doc.12, subcarp.01, carp.01), para luego si, proceder a actualizar el susodicho valor a esa calenda.

Así las cosas, el retroactivo de mesadas causadas en favor de la pensionada desde el 1° de marzo de 2018 hasta el 14 de enero de 2022, incluyendo la mesada completa de ese periodo, asciende a la suma de **\$43.581.447**, como se observa a continuación, con la precisión de que, el derecho pensional se pagará sobre 13 mesadas por año, dada la fecha de causación del derecho⁸.

Ahora, aunque no sea motivo de controversia, importa aclarar que, el valor por reconocer de manera definitiva a la beneficiaria, estará sujeto a las deducciones por concepto de aportes al SGSSS, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993-

FECHAS		No DE PAGOS	VALOR PENSIÓN	TOTAL MESADAS ADEUDADAS
INICIO	FIN			
1/03/2018	31/12/2018	11	\$ 781.242,00	\$ 8.593.662,00
1/01/2019	31/12/2019	13	\$ 828.116,00	\$ 10.765.508,00
1/01/2020	31/12/2020	13	\$ 877.803,00	\$ 11.411.439,00
1/01/2021	31/12/2021	13	\$ 908.526,00	\$ 11.810.838,00
1/01/2022	30/01/2022	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
TOTAL MESADAS VENCIDAS				\$ 43.581.447,00

Aclarado lo anterior, y para efectos de la indexación de cada cuota pensional vencida, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha insistido de manera uniforme y reiterada, en afirmar que la fórmula matemática que mejor responde para la morigeración del fenómeno económico de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, corresponde a:

$$VA = VH \times \frac{IPC \text{ Final}}{IPC \text{ Inicial}}$$

Donde:

VA = Valor actualizado
VH = Valor de cada mesada adeudada (1 SMLMV)

⁸ **Acto Legislativo 01 de 2005. Artículo 1°.** Se adicionan los siguientes incisos y párrafos al artículo 48 de la Constitución Política:
(...)
"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento".
(...)
Parágrafo transitorio 6. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año"

IPC Final= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuó el pago (enero de 2022).
IPC Inicial= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes de exigibilidad de cada mesada pensional.

Cálculos que aplicados correctamente arroja el valor de \$ 3.670.349, como cantidad dineraria por reconocer con motivo de la indexación del retroactivo pensional y que a continuación se resume así:

Año	Período	IPC Inicial	IPC Final (ene/2022)	Factor de Indexación	Mesada Pensional Reconocida	Mesada Indexada	Valor de la Indexación
2018	Marzo	98,45	113,26	1,15	\$ 781.242	\$ 898.766	\$ 117.524
2018	Abril	98,91	113,26	1,15	\$ 781.242	\$ 894.586	\$ 113.344
2018	Mayo	99,16	113,26	1,14	\$ 781.242	\$ 892.330	\$ 111.088
2018	Junio	99,31	113,26	1,14	\$ 781.242	\$ 890.982	\$ 109.740
2018	Julio	99,18	113,26	1,14	\$ 781.242	\$ 892.150	\$ 110.908
2018	Agosto	99,30	113,26	1,14	\$ 781.242	\$ 891.072	\$ 109.830
2018	Septiembre	99,47	113,26	1,14	\$ 781.242	\$ 889.549	\$ 108.307
2018	Octubre	99,59	113,26	1,14	\$ 781.242	\$ 888.477	\$ 107.235
2018	Noviembre	99,70	113,26	1,14	\$ 1.562.484	\$ 1.774.994	\$ 212.510
2018	Diciembre	100,00	113,26	1,13	\$ 781.242	\$ 884.835	\$ 103.593
2019	Enero	100,60	113,26	1,13	\$ 828.116	\$ 932.330	\$ 104.214
2019	Febrero	101,18	113,26	1,12	\$ 828.116	\$ 926.986	\$ 98.870
2019	Marzo	101,62	113,26	1,11	\$ 828.116	\$ 922.972	\$ 94.856
2019	Abril	102,12	113,26	1,11	\$ 828.116	\$ 918.453	\$ 90.337
2019	Mayo	102,44	113,26	1,11	\$ 828.116	\$ 915.584	\$ 87.468
2019	Junio	102,71	113,26	1,10	\$ 828.116	\$ 913.177	\$ 85.061
2019	Julio	102,94	113,26	1,10	\$ 828.116	\$ 911.137	\$ 83.021
2019	Agosto	103,03	113,26	1,10	\$ 828.116	\$ 910.341	\$ 82.225
2019	Septiembre	103,26	113,26	1,10	\$ 828.116	\$ 908.313	\$ 80.197
2019	Octubre	103,43	113,26	1,10	\$ 828.116	\$ 906.820	\$ 78.704
2019	Noviembre	103,54	113,26	1,09	\$ 1.656.232	\$ 1.811.714	\$ 155.482
2019	Diciembre	103,80	113,26	1,09	\$ 828.116	\$ 903.588	\$ 75.472
2020	Enero	104,24	113,26	1,09	\$ 877.803	\$ 953.760	\$ 75.957
2020	Febrero	104,94	113,26	1,08	\$ 877.803	\$ 947.398	\$ 69.595
2020	Marzo	105,53	113,26	1,07	\$ 877.803	\$ 942.101	\$ 64.298
2020	Abril	105,70	113,26	1,07	\$ 877.803	\$ 940.586	\$ 62.783
2020	Mayo	105,36	113,26	1,07	\$ 877.803	\$ 943.622	\$ 65.819
2020	Junio	104,97	113,26	1,08	\$ 877.803	\$ 947.127	\$ 69.324
2020	Julio	104,97	113,26	1,08	\$ 877.803	\$ 947.127	\$ 69.324
2020	Agosto	104,96	113,26	1,08	\$ 877.803	\$ 947.218	\$ 69.415
2020	Septiembre	105,29	113,26	1,08	\$ 877.803	\$ 944.249	\$ 66.446
2020	Octubre	105,23	113,26	1,08	\$ 877.803	\$ 944.787	\$ 66.984
2020	Noviembre	105,08	113,26	1,08	\$ 1.755.606	\$ 1.892.272	\$ 136.666
2020	Diciembre	105,48	113,26	1,07	\$ 877.803	\$ 942.548	\$ 64.745
2021	Enero	105,91	113,26	1,07	\$ 908.526	\$ 971.576	\$ 63.050
2021	Febrero	106,58	113,26	1,06	\$ 908.526	\$ 965.469	\$ 56.943
2021	Marzo	107,12	113,26	1,06	\$ 908.526	\$ 960.602	\$ 52.076
2021	Abril	107,76	113,26	1,05	\$ 908.526	\$ 954.897	\$ 46.371
2021	Mayo	108,84	113,26	1,04	\$ 908.526	\$ 945.421	\$ 36.895
2021	Junio	108,78	113,26	1,04	\$ 908.526	\$ 945.943	\$ 37.417
2021	Julio	109,14	113,26	1,04	\$ 908.526	\$ 942.823	\$ 34.297
2021	Agosto	109,62	113,26	1,03	\$ 908.526	\$ 938.694	\$ 30.168
2021	Septiembre	110,04	113,26	1,03	\$ 908.526	\$ 935.111	\$ 26.585
2021	Octubre	110,06	113,26	1,03	\$ 908.526	\$ 934.941	\$ 26.415
2021	Noviembre	110,60	113,26	1,02	\$ 1.817.052	\$ 1.860.753	\$ 43.701
2021	Diciembre	111,41	113,26	1,02	\$ 908.526	\$ 923.612	\$ 15.086
GRAN TOTAL POR INDEXACIÓN CUOTAS PENSIONALES VENCIDAS							\$ 3.670.349

En esta dirección, no soslaya la Sala que, la AFP PORVENIR S.A., procedió a pagar a la señora MÚNERA MEJÍA por la actualización del retroactivo pensional, la suma de \$2.703.919; adeudando en consecuencia únicamente la suma de \$966.430, (doc.12, subcarp.01, carp.01), suma que a pesar de ser ligeramente inferior, puntualmente en \$31, dicha diferencia obedece al cálculo que por decimales se atribuyen al factor de indexación y que en todo caso, en virtud del principio constitucional de la *no reformatio in pejus*⁹, el juez de apelaciones no puede variar.

Como corolario de lo expuesto, al no evidenciarse ningún yerro protuberante en la decisión revisada, no surge alternativa distinta para la Sala que confirmar el auto de primer grado censurado, en cuanto ordenó librar el mandamiento de pago a favor de la señora PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA, en los términos de ley.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, no hay lugar a condena en costas en vista de su no causación, dado que no se ha integrado el contradictorio y la parte ejecutada no tiene conocimiento de la demanda formulada en su contra.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto dictado el 1° de agosto de 2022 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por PAULA ANDREA MÚNERA MEJÍA, y en contra de la AFP PORVENIR S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.


SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

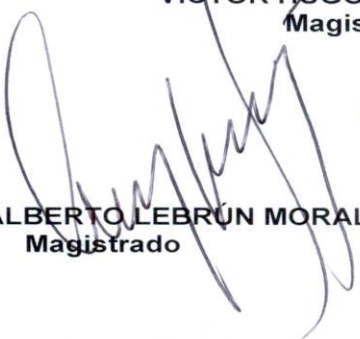
Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

⁹ Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencia SL3759 de 2022. (...) *La Sala ha ilustrado que el superior no puede agravar o desmejorar la situación de la única parte que apela del pronunciamiento que pone fin a la instancia inicial, ni de aquella en cuyo favor se encuentra instituido el grado jurisdiccional de consulta. Ha explicado que este defecto procedimental se materializa cuando el juez de la alzada genera mayores cargas o propicia una desmejora de lo obtenido, en perspectiva de las determinaciones adoptadas por el a quo (CSJ SL2583-2020). En ese orden, tal restricción representa un límite al poder jurisdiccional del juez de segundo nivel, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso (CSJ SL5596-2019).*



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS n.º 49** fijados en la página web por la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m.

Medellín, 22 de marzo de 2023.

Secretario